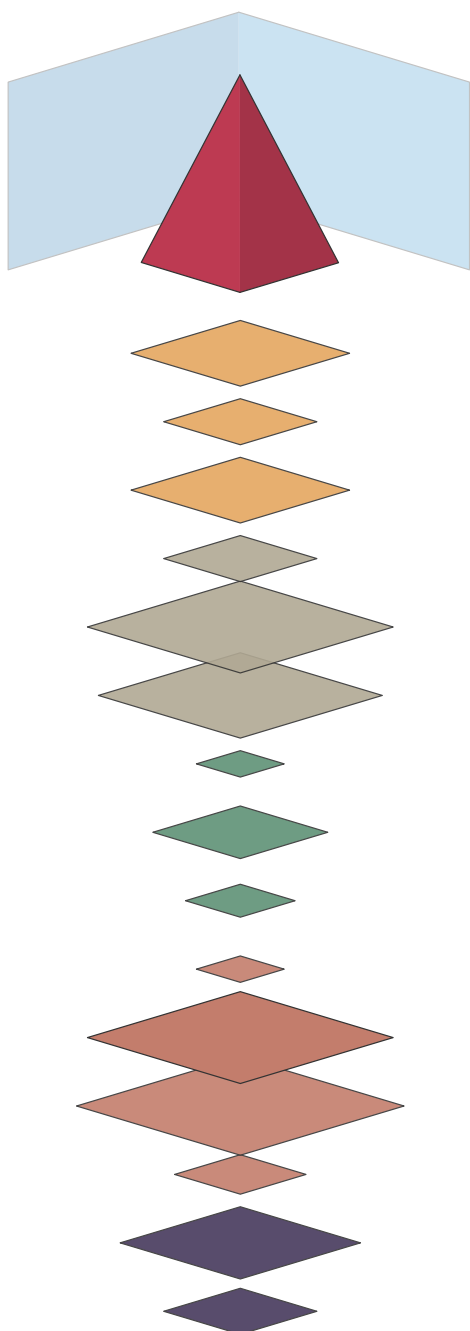




ARGENTINA



5,00

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

95.º de 193 países

21.º de 35 países americanos

9.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES

4,50

TRATA DE PERSONAS 5,00

TRÁFICO DE PERSONAS 3,50

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 5,00

TRÁFICO DE ARMAS 3,50

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 7,00

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 6,50

DELITOS CONTRA LA FLORA 2,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 4,00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 2,50

COMERCIO DE HEROÍNA 2,00

COMERCIO DE COCAÍNA 7,00

COMERCIO DE CANNABIS 7,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,00

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 5,50

DELITOS FINANCIEROS 3,50



ACTORES CRIMINALES

5,50

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 5,00

REDES CRIMINALES 6,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 6,00

ACTORES EXTRANJEROS 5,50

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 5,00



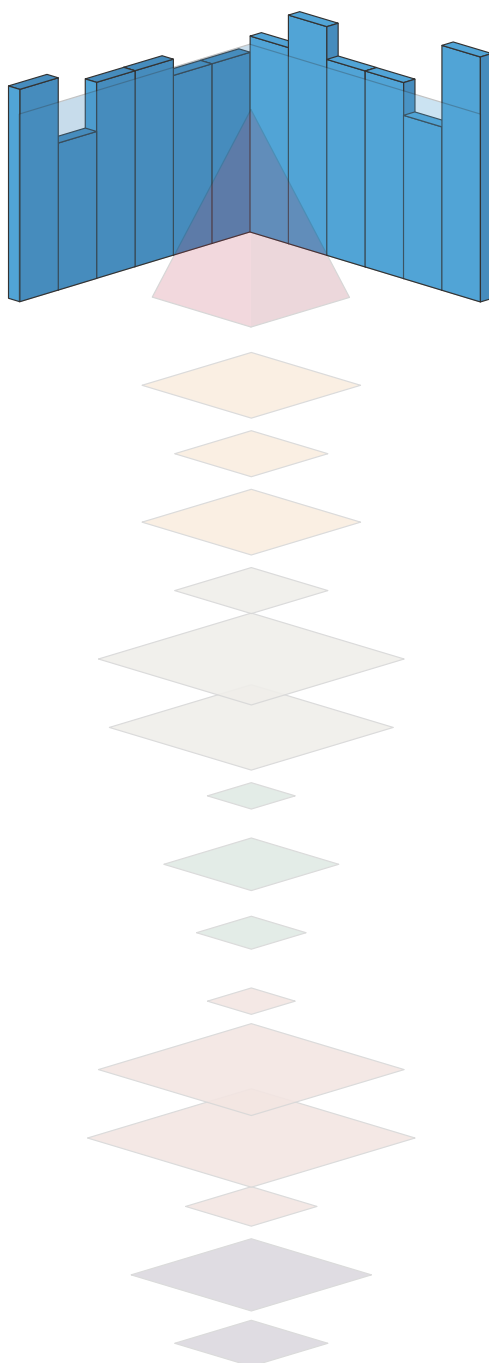
5,96

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





ARGENTINA



5,96

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

39.º de 193 países

6.º de 35 países americanos

3.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	6,50
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	5,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,50
INTEGRIDAD TERRITORIAL	6,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	7,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	6,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	6,00
PREVENCIÓN	5,00
ACTORES NO ESTATALES	7,50



5,00

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 4,50



ACTORES CRIMINALES 5,50



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

La trata de personas sigue siendo un problema moderado en Argentina y la forma más común de este delito es la explotación laboral en zonas de producción agrícola. Los datos oficiales muestran que la mayoría de las víctimas rescatadas son mujeres argentinas mayores de edad. Sin embargo, muchas de las redadas que tienen como objetivo rescatar a las víctimas de la trata acaban con la detención de personas traficadas que han contraído importantes deudas para llegar a Argentina. En el país operan delincuentes extranjeros procedentes de diversos países y la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata son motivo de preocupación. Los traficantes utilizan cada vez más las redes sociales y los clubes deportivos juveniles para llegar a las víctimas.

Argentina es un país tanto de destino como de tránsito para el tráfico de personas, que entran desde Bolivia y Brasil. Más que las redes delictivas, quienes facilitan las actividades de contrabando son compatriotas y amigos que viven en Argentina. Buenos Aires, Rosario y el Río de la Plata son los destinos de las personas objeto de tráfico y, según los informes, las mujeres que viven en el norte de Argentina guían a las personas que entran de contrabando en territorio argentino desde Bolivia. El contrabando de personas sigue siendo un problema en la mayoría de las zonas fronterizas terrestres y marítimas, sobre todo en el noroeste, en la frontera con Bolivia, y en el noreste, en la triple frontera con Paraguay y Brasil. Se sabe que grupos mafiosos chinos y otros actores híbridos participan en el contrabando hacia Argentina. Las organizaciones transnacionales vinculadas al contrabando de ciudadanos venezolanos y colombianos también están presentes en las principales ciudades.

La extorsión y los cobros ilegales por protección son frecuentes en algunas regiones del país. En Rosario, los grupos delictivos y las redes de clanes familiares, coordinados desde la cárcel, han contribuido a aumentar los casos de extorsión, envalentonados por la violencia exhibida por ciertas bandas más grandes. Los autores de las extorsiones, que pueden formar parte de un grupo delictivo o fingir serlo, exigen favores monetarios a las pequeñas empresas a cambio de protección o intimidan a las víctimas para que entreguen sus casas y las utilicen como laboratorios de drogas. Las víctimas suelen tener demasiado miedo para pedir ayuda a las autoridades y las fuerzas de seguridad locales son inadecuadas. Los cobros ilegales por protección también han aumentado en los

últimos años y son uno de los servicios más importantes que los grupos de tipo mafioso ofrecen a las organizaciones delictivas extranjeras.

TRÁFICO

El mercado del tráfico de armas en Argentina es menos importante que en otras regiones. Sin embargo, como Paraguay tiene prohibida la importación de armas, ha aumentado la producción local y las armas se introducen de contrabando a través de la porosa frontera entre ambos países. Se sospecha que algunos grupos delictivos de Brasil gestionan los flujos regionales. Las investigaciones también han revelado que algunas piezas de armas procedentes del extranjero se montan en Argentina para ser introducidas de contrabando en Brasil. Las fuerzas de seguridad brasileñas también se han incautado ocasionalmente de granadas y excedentes de guerra, procedentes del conflicto de las Malvinas.

El comercio de productos falsificados es un problema notable en Argentina. El número de mercados físicos informales ha aumentado en los últimos años y buena parte de ellos vende productos falsificados. Las redes sociales y otros sitios web también se utilizan para vender productos falsificados. Se falsifican gran cantidad de medicamentos, alimentos, juguetes, accesorios y ropa y las marcas deportivas famosas se encuentran entre los artículos más falsificados. Estos productos proceden principalmente de China y de India y se venden en todo el país, aunque dos zonas de Buenos Aires han sido identificadas como los mercados principales. Argentina se ve perjudicada por importantes deficiencias en su marco jurídico y por la escasa aplicación de la ley en lo que respecta a los productos falsificados. Los delincuentes que se dedican a la falsificación rara vez reciben sentencias disuasorias y el público en general no considera que el mercado sea ilegal.

Argentina es un país de origen y destino para el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales y uno de los productos más comercializados ilegalmente es el alcohol. Las bebidas alcohólicas argentinas se introducen irregularmente en países vecinos, como Bolivia y Brasil, donde cada año se incautan toneladas de cerveza y vino comercializados ilegalmente. El comercio ilícito de productos del tabaco también es frecuente. Las fábricas legales de transformación de tabaco en Argentina introducen su producto de contrabando en Paraguay, donde se transforma en cigarrillos, antes de volver a introducirse ilegalmente en Argentina con marcas falsificadas o de baja calidad. Debido a las cuarentenas y los cierres de fábricas impuestos como respuesta a la pandemia de la COVID-19, los cigarrillos empezaron a escasear en Argentina, lo que animó a algunos grupos de narcotraficantes a introducirse en este mercado de contrabando.

MEDIOAMBIENTE

La deforestación es una de las principales preocupaciones en Argentina, sobre todo en las regiones del Gran Chaco y el delta del Paraná, donde cada año se talan miles de hectáreas de bosques, infringiendo la legislación forestal vigente. Sin embargo, no hay pruebas de que en estas actividades estén implicados grupos de delincuencia organizada. La principal razón de la deforestación es la roturación de tierras para la agricultura.

Argentina es un país de origen, tránsito y destino para el comercio de especies silvestres, ya que a menudo se venden animales en mercados locales o por Internet. La falta de disposiciones eficaces y los limitados esfuerzos contra el tráfico realizados por el Gobierno argentino complican la lucha contra los delitos contra la fauna. La pesca ilegal, practicada a gran escala por buques extranjeros en el mar Argentino, es una de las actividades ilícitas más importantes. A pesar de la considerable reducción de los recursos disponibles, las sanciones por estos delitos son de carácter meramente administrativo. La fauna ilegal también entra en Argentina a través de Bolivia, Paraguay y Chile, con destino a la Unión Europea u Oriente Medio. Las especies no autóctonas más traficadas son osos pardos, aves y felinos como el jaguar. Entre las especies autóctonas recuperadas figuran lobos de crin, ciervos de los pantanos, reptiles, como tortugas y la boa argentina, y cardenales amarillos y otras aves pequeñas.

Los delitos contra los recursos no renovables no son habituales y se producen sobre todo en la economía sumergida, principalmente en las zonas fronterizas. Se sabe que funcionarios corruptos facilitan el robo de bienes públicos, como gasolina y cables de cobre. También se ha denunciado el contrabando de tanques de gasolina argentinos a Brasil y Paraguay, debido a los precios subvencionados y a un mercado menor de gasolina de contrabando en Brasil. El Estado controla las industrias mineras del cobre, el oro, la plata y el litio y las autoridades administrativas locales o provinciales intervienen en los casos de minería no autorizada, haciendo uso de sus facultades sancionadoras. El sector minero, bien regulado, no muestra indicios de que existan redes mineras ilegales generalizadas en el país.

DROGAS

El consumo y el tráfico de heroína en Argentina sigue siendo un problema menor y en el país hay poca demanda de tratamiento contra la adicción a los opiáceos. Sin embargo, Argentina sigue siendo un país de destino y tránsito clave para el comercio regional de cocaína y su mercado de esta droga se ha convertido en una preocupación importante y creciente en la última década. La mayor parte de la cocaína que se introduce de contrabando en Argentina pasa por su región noroccidental, escasamente poblada, y la frontera entre Argentina y Bolivia es una ruta muy frecuentada. De hecho, recientes incautaciones de droga han confirmado que Argentina ha ido ganando importancia como centro

de distribución de la cocaína boliviana. Los informes indican, además, que los traficantes utilizan cada vez más la navegación fluvial y marítima como medio de transporte y está surgiendo una ruta que conecta Bolivia, Paraguay, Argentina, el Atlántico, Europa y África. Los grupos de delincuencia organizada relacionados con las drogas en Argentina son pequeños, aunque algunos mantienen vínculos internacionales con grupos de delincuencia organizada de países como Brasil, así como con grupos mafiosos italianos. Las actividades de narcotráfico contribuyen a un mercado de drogas violento, específicamente en Rosario, donde las condiciones geográficas amplifican su importancia estratégica para los actores criminales. Allí se producen homicidios, debido, principalmente, a las disputas entre bandas por el control de los puntos de distribución de drogas.

Argentina es uno de los principales países de tránsito y destino del comercio de cannabis y la mayor parte del suministro procede de Paraguay. La legalización del cannabis para uso médico ha reducido los precios en la industria ilícita. El comercio de cannabis es el mayor mercado delictivo de Argentina, impulsado por la demanda local. De hecho, Argentina tiene una de las tasas de consumo per cápita más altas del mundo. Las organizaciones delictivas lo transportan en camiones que utilizan carreteras alternativas que convergen en las ciudades, una táctica que proporciona numerosas vías de escape. Las autoridades han incautado miles de plantas de cannabis en zonas rurales, lo que revela un cultivo ilegal a escala industrial. Al parecer, en el comercio de cannabis están implicados policías, las fuerzas de seguridad, jueces y políticos corruptos, a veces en los niveles más altos de las redes de tráfico.

Aunque el mercado es limitado y los índices generales de consumo son bajos, los estudios nacionales sugieren que el consumo de drogas sintéticas es habitual entre las personas de 25 a 34 años que viven en las grandes ciudades. La mayor parte del producto se importa de México y Europa, pero, al parecer, en el país hay laboratorios de éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas. Las drogas sintéticas producidas localmente e importadas se trafican a través del corredor del delta del Paraná hacia Uruguay. Se registran intoxicaciones por sustancias psicoactivas, así como incautaciones de LSD.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Argentina se ha convertido en un centro neurálgico de la ciberdelincuencia. El país ha experimentado un elevado número de ataques de denegación de servicio y de ransomware en los últimos años. Las instituciones públicas y privadas son los principales objetivos de estos ataques, llevados a cabo por varios grupos de hackers que operan en el país. Además, recientemente Argentina fue blanco de una campaña de amenazas persistentes avanzadas, patrocinada por el Estado y dirigida a entidades gubernamentales, organizaciones diplomáticas y el sector privado. También se enfrenta a un aumento de los delitos

financieros dependientes de la cibernética, con un número creciente de entidades investigadas por esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas y NFT.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros cibernéticos son comunes en el país, donde los delincuentes aprovechan los mercados en línea y las plataformas de mensajería para robar información de tarjetas de crédito. Los estafadores también se hacen pasar por empleados de populares plataformas de comercio electrónico para obtener información personal y los datos bancarios de las víctimas. Las pequeñas empresas también están en el punto de mira, ya que se devuelven artículos comprados con piezas que faltan, para obtener beneficios. El phishing es otro de los delitos financieros cibernéticos más comunes en Argentina. La evasión fiscal es otra forma de delito financiero que plantea una gran preocupación en el país, exacerbada por la gran economía informal de Argentina.

ACTORES CRIMINALES

El crimen organizado es un problema creciente en Argentina, con clanes familiares que controlan zonas específicas de las ciudades y se dedican a una serie de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la extorsión, el mercado negro de divisas y la contratación de asesinos a sueldo para asesinar a jueces. Algunos de estos clanes operan desde las cárceles y gozan de la protección de políticos, jueces y diputados. Los sindicatos y las bandas de fútbol también están implicados en la extorsión, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Las redes delictivas de Argentina son conocidas por suministrar cocaína y marihuana a las zonas urbanas y algunas tienen conexiones

con la Policía y con agentes estatales. El robo de coches y el robo de piezas de automóviles son también importantes fuentes de ingresos para estos grupos. Algunos grupos delictivos operan en regiones fronterizas, transformando la base de coca en cocaína.

Los grupos extranjeros de delincuencia organizada de México, Colombia y Brasil están relacionados con el aumento de la violencia en el mercado de las drogas ilícitas y el tráfico de armas en Argentina, pero su presencia es limitada, debido a la diversidad de territorios controlados por los distintos grupos. Los grupos mafiosos asiáticos son conocidos por extorsionar a empresas locales. Los grupos mafiosos tradicionales, incluidos algunos miembros de la mafia italiana, están presentes en el país, sobre todo en las regiones septentrionales. Los agentes del sector privado también están implicados en la economía ilegal, en ámbitos como el contrabando de productos sujetos a impuestos especiales. Además, se sabe que los agentes del sector privado participan en la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Se cree que las empresas de transporte participan en actividades de contrabando y los exportadores agrícolas pueden estar implicados en el contrabando de mercancías. Los escándalos de corrupción son habituales en la industria deportiva regional y local y en los casos más sonados han estado implicados altos cargos del Gobierno argentino y entidades empresariales, como imprentas de billetes y empresas de construcción. La corrupción es una preocupación creciente, ya que el crimen organizado se ha infiltrado en casi todos los niveles del Estado. Aunque los actores criminales estatales no prevalecen a nivel del Estado central, sí que operan a nivel local, con fuerzas de seguridad, personal penitenciario y políticos que facilitan la delincuencia, especialmente las actividades de tráfico de personas.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

La corrupción y la inseguridad son los dos problemas más acuciantes a los que se enfrentan los argentinos, que tienen poca confianza en las instituciones del Estado, debido a la percepción de falta de transparencia y de corrupción. Según varias encuestas, la Presidencia es el órgano gubernamental más corrupto del país. Aunque el Gobierno federal se ha esforzado por mejorar la transparencia, a nivel municipal sigue siendo motivo de preocupación. Se ha acusado al Gobierno de falta de transparencia en las adquisiciones relacionadas con la pandemia de la COVID-19, ya que los contratos eludieron los procesos de licitación, debido a la

declaración de emergencia. También hay indicios de que el dinero del narcotráfico se ha utilizado para financiar campañas políticas, sobre todo a nivel local.

Argentina participa activamente en los esfuerzos internacionales de lucha contra la delincuencia organizada, colaborando con INTERPOL y con otros organismos encargados de la aplicación de la ley y presentando periódicamente informes sobre la delincuencia organizada a organizaciones internacionales. El país ha estado trabajando para mejorar la cooperación dentro de la región y en Europa en lo que respecta a las estrategias contra la delincuencia organizada y ha firmado tratados de extradición con varios países. Cuenta con un marco jurídico sólido para combatir

la delincuencia organizada, que incorpora diversos tipos de delitos. Sin embargo, necesita actualizar y reforzar sus leyes contra la ciberdelincuencia y la normativa sobre protección de datos. Aunque la legislación contra las nuevas sustancias psicoactivas está más avanzada que en otros países de la región, su eficacia ha sido cuestionada.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial argentino cuenta con unidades especializadas en delincuencia organizada, pero se considera corrupto e ineficaz, especialmente en los tribunales inferiores y provinciales. Las acusaciones de politización y manipulación política contribuyen a la escasa confianza de la población en el Poder Judicial. Además, existe un alto índice de impunidad y cada año se enjuician con éxito pocos delitos. Las condiciones penitenciarias del país son deficientes y se ven afectadas por problemas como el hacinamiento, la falta de higiene y la alimentación deficiente. Se cree que los grupos criminales ejercen influencia sobre los funcionarios de prisiones y siguen llevando a cabo actividades delictivas desde las cárceles.

En general, se considera que la Policía argentina es más digna de confianza que el Gobierno y el Poder Judicial, aunque la confianza pública en la Policía sigue siendo relativamente limitada. Se ha acusado a agentes de ofrecer protección a narcotraficantes y blanqueadores de dinero. La Policía Federal Argentina es la segunda fuerza más grande del país, después de la Gendarmería Nacional Argentina, y mantiene unidades especiales bien equipadas.

La longitud de las fronteras terrestres de Argentina dificulta el control estatal, lo que da lugar a fronteras porosas vulnerables al tráfico de drogas y al contrabando. Las fronteras Argentina-Bolivia y Argentina-Paraguay son las principales rutas para el tráfico de cocaína y el de marihuana, respectivamente. Sin embargo, Argentina también se utiliza como país de tránsito alternativo para la droga destinada a España y los principales puntos de tránsito son los puertos de Buenos Aires y Rosario. En cuanto a la ciberdelincuencia, el Gobierno ha informado de varios centenares de incidentes de ciberseguridad contra el sector público, incluidos ataques de ransomware.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Aunque Argentina cuenta desde hace muchos años con legislación contra el blanqueo de capitales, sus mecanismos de prevención, investigación y persecución del delito se consideran deficientes. La limitada eficacia de su régimen jurídico convierte a Argentina en un país de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aunque ha habido algunos procesados, Argentina ha sido criticada por su falta de condenas, que ascienden a unas pocas en las últimas dos décadas. El Poder Judicial carece de experiencia en este tipo de delitos y la falta de coordinación interinstitucional puede contribuir a su

ineficacia. Los sectores económicos con mayor riesgo de blanqueo de dinero son el comercio y el mercado informal de cambio de divisas.

El entorno regulador económico de Argentina se enfrenta a varios retos. La calidad reguladora del país es baja en comparación con la media regional y los líderes empresariales han identificado el estancamiento a largo plazo, las crisis de empleo y de medios de subsistencia y el colapso del Estado como problemas socioeconómicos significativos. La tasa de empleo informal es considerable y la inflación es sumamente alta. Aunque la mayoría de las empresas legítimas operan sin caer en actividades delictivas, las constantes crisis económicas del país obstaculizan el desarrollo del sector privado.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Argentina cuenta con un sistema bien establecido para proporcionar asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas de la trata. Sin embargo, en los últimos años han disminuido los esfuerzos de persecución y protección, debido a la corrupción que obstaculiza las medidas contra la trata. Además, el Gobierno no ha mejorado las medidas de protección de testigos e incluso ha disuelto la Agencia Nacional para la Protección de Testigos y Acusados. Sin embargo, el país mantiene un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de la drogadicción y durante la pandemia el Gobierno creó un plan para proporcionar servicios esenciales y asistencia a través de centros de llamadas y videoconferencias, con resultados positivos.

El Gobierno argentino ha puesto en marcha diversas estrategias para prevenir el crimen organizado, la trata de personas y la ciberdelincuencia. El Plan Federal incluye medidas como el refuerzo de los controles fronterizos y el uso de la tecnología para mejorar la vigilancia en las fronteras. También ha elaborado un plan para combatir la trata de personas, que incluye campañas de concienciación, grupos de trabajo gestionados por el Gobierno y una línea telefónica de ayuda contra la trata. Sin embargo, la eficacia de estas medidas de prevención es dudosa.

Varias ONG participan en la lucha contra el crimen organizado en Argentina y los medios de comunicación nacionales operan con relativa libertad, aunque algunos medios críticos con las autoridades han sido objeto de demandas por difamación, por lo que han sufrido tensiones financieras. Se ha acusado a la Agencia Federal de Inteligencia de recopilar expedientes sobre periodistas, pero no se han producido agresiones contra periodistas en las dos últimas décadas.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.